

**PROPOSICION ADITIVA**  
**SEPTIEMBRE DE 2021**

ADICIÓNASE AL PROYECTO DE LEY No 027/2021(CÁMARA) y 046/2021 (SENADO)  
"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL Y SE DICTAN  
OTRAS DISPOSICIONES"

**ARTÍCULO NUEVO: Adiciónese el Parágrafo 7 al artículo 32 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:**

**Parágrafo 7:** *Para los contribuyentes sometidos a las reglas previstas en este artículo, el término a que se refiere el numeral 5 del artículo 49, será de 10 años, respectivamente.*

**JUSTIFICACIÓN**

Esta proposición normativa constituye una medida que busca "adaptar" las reglas que aplican en los contratos de concesión y las asociaciones público-privadas que ejecuten proyectos de infraestructura conforme con la realidad económica de sus operaciones, de tal manera que, con ocasión de las diferencias temporales que se originan en el reconocimiento de los ingresos, no se genere una doble tributación en cabeza de los accionistas de sociedades que los ejecutan.

En efecto, el Artículo 32 del Estatuto Tributario, modificado por la ley 1819 de 2016, *establece reglas especiales en materia de impuesto sobre la renta para los contribuyentes que pertenezcan a esta industria, de manera tal que la determinación de sus ingresos, costos y deducciones son completamente diferentes a las reglas generales de tributación, lo cual obedece a la especialidad en que se despliegan las operaciones de esta industria.*

Si bien la posibilidad de realizar *carry forward* y *carry back* pretende eliminar el fenómeno de la doble imposición derivado de las diferencias temporales entre la contabilidad y las disposiciones tributarias, su restricción en el tiempo, no consulta la realidad en la ejecución de estos esquemas para la materialización de la infraestructura pública del país, lo cual a pesar de haber sido reconocido en gran medida por los cambios adicionados por la Ley 1819 de 2016, aún es susceptible de ajustes como se evidencia en el asunto en estudio.

Específicamente, la limitación en el tiempo no consulta en la ejecución de proyectos de infraestructura, que se desarrollan bajo contratos de concesión y Asociaciones Público Privadas – APP, en un término de duración que en algunos casos puede superar los 25 años.

Estas modalidades contractuales, por su especial connotación para el desarrollo y promoción de la economía del país, han sido estructuradas en un marco normativo

especial para atender las necesidades del modelo de negocio en temas como: las reglas de subcapitalización de los costos y gastos, reglas de reconocimiento fiscal de los ingresos, retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros a no residentes para la financiación de proyectos de APP, entre otros.

En virtud de lo descrito, es evidente que el sector se ve seriamente afectado por una limitación temporal para ejercer esta medida que elimina la doble tributación, aspecto por el cual, crea un desincentivo en la ejecución de este tipo de proyectos trascendentales para el país.

Cordialmente,



**CARLOS ARDILA ESPINOSA**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Putumayo